

## **Fiscalización Electoral y restricción de derechos político-electorales del ciudadano: análisis y prospectiva**

Juan Antonio GARZA GARCÍA<sup>1</sup>  
Jorge RESÉNDIZ OLOARTE<sup>2</sup>

### **Introducción**

El proceso electoral concurrente que se llevó a cabo ha sido el más grande en la historia democrática del país, pues se renovaron más de veinte mil cargos electivos en los ámbitos federal, local y municipal y estuvieron en posibilidades de concurrir a las urnas más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos para emitir su sufragio.<sup>3</sup>

Además, se enfrentaron diversos retos o problemas jurídicos que no se habían presentado o bien, no habían alcanzado la frecuencia o magnitud que en esta ocasión y para los cuales no había precedentes jurídicos, lo que requirió que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, llevaran a cabo interpretaciones de la normatividad con miras a la tutela y potenciación efectiva de derechos políticos, pero también de salvaguardar los principios y valores que rigen la organización y el desarrollo de los procesos electorales.

Lo anterior trajo como consecuencia que porque por primera vez se adoptaron medidas efectivas y verificables para la protección de los derechos político electorales de grupos sociales en situación de vulnerabilidad y que históricamente habían sido soslayados de los procesos de participación y de toma de decisiones públicas, a pesar de representar amplios sectores de nuestra sociedad. Así, por primera ocasión observamos que no sólo se garantizó un número específico de postulaciones, sino que a partir del entramado normativo e institucional diseñado para tal efecto, fue posible que alcanzaran espacios de representación en los distintos órganos electivos, de manera que en los próximos años, la ciudadanía mexicana contará con representantes provenientes de sectores como las comunidades indígenas, la población afromexicana, las personas con discapacidad, la perteneciente a la diversidad sexual e, incluso, personas residentes en el extranjero. Sin duda, un avance significativo en el proceso de desarrollo y consolidación democrática de nuestro país, aunado

---

<sup>1</sup> Licenciado y Maestro en Derecho. Director General de Recursos Humanos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. E-mail: [jagarzagarcia@hotmail.com](mailto:jagarzagarcia@hotmail.com)

<sup>2</sup> Licenciado en Derecho, Maestro en Políticas Públicas Comparadas. Asesor de Consejero Electoral en el Instituto Nacional Electoral. E-mail: [jorgeresendiz00@hotmail.com](mailto:jorgeresendiz00@hotmail.com)

<sup>3</sup> Con corte al 15 de abril de 2021, se encontraban en la lista nominal 93,528,473 ciudadanas y ciudadanos (INE).

a que por primera vez, los representantes populares en funciones estuvieron en condiciones de optar por la elección consecutiva al mismo cargo, bajo las normas y procedimientos previstos en la ley y de conformidad con los lineamientos y criterios emitidos por las autoridades, administrativas y jurisdiccionales para dar cauce al ejercicio de esa modalidad del derecho a ser votado.

En cuanto a la problemática enfrentada, es importante señalar que la pandemia generada por el virus causante de la enfermedad COVID-19 impuso nuevas condiciones para la organización y desarrollo de los procesos electorales en distintos rubros, como en la capacitación de los integrantes de mesas directivas de casilla, y generar condiciones para garantizar que la jornada electoral fuera segura y confiable para toda la ciudadanía, siguiendo protocolos sanitarios y de seguridad que permitieran el ejercicio del voto en condiciones óptimas.

Por lo que se refiere a los procesos de selección de candidaturas y las campañas electorales, la pandemia también modificó la forma en que éstos se venían llevando a cabo, lo que implicó nuevas formas de comunicación o vinculación de los actores políticos con el electorado y que las autoridades adecuaran normas y procedimientos para llevar a cabo sus funciones, tales como la tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores y la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, entre otras.

En el caso concreto de la fiscalización electoral, las nuevas formas de promoción y de vinculación de los partidos políticos, sus precandidatos, candidatos, así como los candidatos independientes implicaron ajustes en los procedimientos de la autoridad, por lo que se requirió, además del apoyo de los órganos desconcentrados que ya se otorga de manera habitual, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como las redes sociales como insumo relevante para allegarse de información relacionada con los asuntos sometidos a su conocimiento.

Otro factor que representó un reto importante es la legislación, pues si bien por definición se trata de normas de carácter general y abstracto y, por ende, sólo regula situaciones genéricas, la situación de pandemia implicó que la norma no previera diversas situaciones o problemas, los cuales tuvieron que ser subsanadas a través de criterios y precedentes de las autoridades jurisdiccionales, aunado a que ya presentaba algunas deficiencias operativas que en su

momento habían sido colmadas a través de Acuerdos de la autoridad administrativa o resoluciones jurisdiccionales.

En este orden, el objeto de la presente ponencia es realizar un análisis sobre los retos que implicó la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de precampaña en el proceso electoral concurrente 2020-2021 y compartir algunas reflexiones sobre si una infracción en este rubro debe ser sancionada a grado tal que se restrinjan derechos fundamentales, como el de ser votado a cargos electivos, en los términos previstos por el artículo 35 de nuestra Norma Fundamental o, si sería suficiente una sanción que no llegara a afectar el ejercicio de derechos político electorales.

Para ello, se propone el desarrollo de los siguientes apartados. En el primero de ellos se expone el carácter de derecho fundamental del que se encuentra revestido el de ser votado a algún cargo de elección popular, así como en qué consiste la fiscalización de los informes de precampaña y cuál es el procedimiento respectivo, haciendo hincapié en el proceso electoral 2020-2021.

El segundo apartado analiza, a través de la metodología de estudio de casos, diversas vicisitudes que se presentaron durante el proceso electoral referido en materia de fiscalización de los recursos, específicamente relacionados con la restricción de derechos políticos por faltas administrativas y se problematiza sobre si una falta administrativa puede tener como sanción la restricción de un derecho fundamental o, en su caso, bajo qué supuestos o circunstancias esto sería jurídicamente sostenible.

El tercer apartado consiste en un ejercicio de prospectiva por cuanto a si los problemas analizados ameritarían una reforma de la legislación de la materia y, de ser el caso, en qué términos debiera darse la misma, con miras al fortalecimiento del entramado normativo e institucional y seguir dotando de certeza a todos los actores políticos y a la ciudadanía en su conjunto en cuanto a que, hoy por hoy, las elecciones se erigen como el mecanismo por excelencia para la renovación pacífica y dentro de cauces institucionales para la renovación del poder y, por ende, del fortalecimiento de ese componente del complejo andamiaje que constituye nuestra democracia, entendida como sistema de vida tendente a la mejora continua del pueblo, tal como lo prevé el artículo 3 constitucional.

Finalmente, se presentan conclusiones de los hallazgos de la investigación y de los temas que, se considera, podrían contribuir al debate sobre una eventual reforma electoral en la materia objeto de estudio.

## **1. Fiscalización electoral y derechos fundamentales**

El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es derecho de la ciudadanía mexicana el de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley (CPEUM, Artículo 35, fracción II, 2021). Y se hace énfasis en esta última porción normativa, “teniendo las calidades que establezca la ley”, porque ello implica, de acuerdo con el criterio reiterado sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se deben cumplir la totalidad de requisitos previstos en la normatividad para acceder una candidatura para participar en algún proceso electoral.

Este derecho es congruente y se ajusta a obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano a través de la suscripción de diversos Tratados que, además, han sido ratificados por el Senado, por lo que forman parte de la Ley de toda la Unión. A manera de ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comúnmente conocida como Pacto de San José, establece en su artículo 23, por una parte, el derecho de todos los ciudadanos de gozar de los derechos de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, así como tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (CADH, Artículo 23, 1969).

Por otro lado, el mismo dispositivo determina que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades señalados, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal (*Idem*).

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha definido que el derecho a ser votado es una vertiente de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y ha establecido que “[los ciudadanos] tienen el derecho a ser elegidos por el resto de la ciudadanía para ocupar

cargos de esa naturaleza, o bien, ser nombrados para otro tipo de empleos o comisiones como servidores públicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley” (CNDH). Como se advierte de los tres elementos expuestos, es posible colegir que si bien es cierto los derechos político electorales tienen el carácter de fundamentales por cuanto a que resultan inmanentes a la persona, éstos no son de carácter absoluto, pues es indispensable que, para su adecuado ejercicio, se cumplan los requisitos y condiciones que establezcan las leyes.

En el caso que nos ocupa, la legislación es clara al establecer los requisitos para ser postulado a cargos de elección popular, entre los cuales se encuentra el de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña. El no cumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos, indudablemente, traerá aparejada una consecuencia jurídica, la cual estará en función de las circunstancias particulares del caso y del infractor, así como de la valoración que la autoridad lleve a cabo para determinar e imponer las sanciones atinentes.

Esto es, si bien asiste a la ciudadanía el derecho a ser postulado para acceder a un cargo de elección popular, debe cumplir y ajustarse a los requisitos, condiciones y procedimientos previstos en ley, pues de esta manera se garantiza una contienda equitativa y ajustada a derecho. Uno de dichos requisitos es la rendición de cuentas en materia de origen y destino de los recursos.

A diferencia de la percepción generalizada por cuanto a que la fiscalización electoral constituye un procedimiento eminentemente persecutorio cuya finalidad es sancionar a los sujetos obligados, lo cierto es que estamos ante un conjunto de normas y procedimientos contables y de auditoría, entre otros, para conocer el origen, monto y aplicación de los recursos que utilizan para desarrollar sus actividades, ordinarias o de campaña, y, en caso de detectar prácticas contrarias a la ley o irregularidades, se puedan adoptar las medidas correctivas o inhibitorias correspondientes.

Es, asimismo, un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, pues con la fiscalización se permite que conozcan los recursos que se utilizan en la actividad política y si los mismos se obtuvieron y ejercieron conforme a derecho, previniendo así que recursos de procedencia ilícita o no permitida intervengan en los procesos electorales o incidan en el desempeño de algún candidato electo.

Cuando no se informa a la autoridad y, por ende, a la ciudadanía, el sujeto obligado deja de cumplir con la transparencia y rendición de cuentas, pero además, violenta las condiciones

de equidad en la contienda, pues al ocultar información, se pueden obtener beneficios o ventajas indebidos o adicionales, respecto de las de los demás participantes, lo que a todas luces es contrario a la esencia democrática de los procesos electorales.

Incluso, si el partido o el precandidato no incurrieron en gasto alguno, debían presentar su informe en ceros; es decir, la obligación de rendición de cuentas subsiste aún en ese supuesto. En este orden, el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos establece la obligación de presentar informes de precampaña, bajo las siguientes condiciones fundamentales:

- a) Deben ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a un cargo de elección popular, especificando el origen y monto de los ingresos y los gastos realizados.
- b) Los precandidatos y candidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes.
- c) Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes a la conclusión de las precampañas (LGPP, Artículo 79, 2021).

Para cumplir con sus atribuciones, la autoridad electoral desarrolla permanentemente, además, actividades de monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, así como difundida a través de redes sociales, para allegarse de información sobre posibles conceptos de gasto y poder cotejar dicha información con la reportada por los sujetos obligados en sus informes.

Adicionalmente, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral cuenta con un Registro Nacional de Proveedores en el que se encuentran inscritos todos los prestadores de bienes y servicios que llevan a cabo operaciones con los sujetos obligados, lo que garantiza que dichos proveedores se encuentran debidamente constituidos, regulares en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y operan en el marco de la legalidad.

Lo anterior, sin menoscabo del apoyo que puede solicitar a cualquier autoridad o persona física o jurídica colectiva que, con motivo de sus atribuciones o ámbito de actividad, pueda contar con información sobre los asuntos que desahoga la autoridad electoral en la materia, destacando la inoponibilidad de los secretos bancario, fiduciario y fiscal cuando se ejercen funciones de fiscalización.

Estos insumos permiten que la autoridad, de manera previa a la presentación de los informes, recabe información diversa sobre los conceptos de gasto de los sujetos obligados, los cuales

son cotejados en los informes respectivos, de manera que si existen diferencias o inconsistencias, éstas puedan aclararse a través del requerimiento de información correspondiente.

Por su parte, los artículos 229 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determinan las sanciones a las que los sujetos obligados se pueden hacer acreedores por incumplir sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas (LGIPE, Artículos 229 y 456, 2021).

Como puede advertirse, la fiscalización de informes de precampaña constituye un entramado normativo e institucional de blindaje ante la posible injerencia indebida de actores externos o que por disposición legal no pueden intervenir en la contienda electoral.

Sin embargo, a pesar de que el texto legal y los procedimientos a seguir parecieran claros y categóricos en cuanto a sus definiciones y alcances, la práctica evidenció retos y áreas de oportunidad importantes que, se considera, ameritan atención legislativa pronta.

Para dimensionar la magnitud y la relevancia de la fiscalización en los procesos electorales y, en sentido amplio, en el sistema electoral de nuestro país, no debe perderse de vista, en primera instancia, que la reforma política electoral de 2014 estableció que la fiscalización sería una atribución originaria y exclusiva del Instituto Nacional Electoral el que, de manera excepcional, puede solicitar el apoyo de algún Instituto Estatal Electoral para la realización de determinadas funciones.

Entre los efectos inmediatos de esta importante reforma se presentaron los siguientes:

- a) La fiscalización de la totalidad de informes para todo cargo electivo en el país, independientemente del orden o nivel de gobierno del que forme parte. Así, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la fiscalización de informes anuales, de precampaña y de campaña correspondientes a los ámbitos federal, local y municipal de todo el país.
- b) La fiscalización se lleva a cabo a través de un sistema en línea denominado Sistema Integral de Fiscalización en el que los partidos políticos ingresan sus informes, así como la documentación soporte respectiva y reciben las notificaciones a que haya lugar por parte de la autoridad.
- c) El rediseño en cuanto a estructura y atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización para garantizar su capacidad técnica y operativa para desempeñar sus funciones de manera óptima dentro de los cauces y procedimientos previstos en la normatividad.

Otro efecto importante de la reforma político electoral de 2014 en materia de fiscalización de los recursos fue la falta de homogeneidad en la legislación de la materia de las entidades federativas y las Leyes Generales, lo que presenta conflictos y diferencias, por ejemplo, en cuanto a los plazos establecidos para determinada etapa del proceso electoral o de fiscalización. Al no haber una disposición única, es necesario llevar a cabo un ejercicio de interpretación y armonización que permita a la autoridad electoral llevar a cabo sus funciones de fiscalización, sin afectar gravemente el desarrollo de los procesos electorales de las entidades federativas.

En este orden, y de acuerdo al desarrollo de los procesos electorales en las entidades federativas, la duración o vigencia de cada etapa es distinta. Atento a lo anterior, el 7 de agosto de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en uso de la facultad de atracción que le confiere la ley, ajustó a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 (INE 2020, 1-63).

No obstante, dicha determinación fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenando emitir un nuevo fallo en el que analice de manera casuística la situación de cada entidad federativa, en el ejercicio de la facultad de atracción. (SUP-RAP-46/2020, 19-24).

En acatamiento de la sentencia referida, el 11 de septiembre del mismo año el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG289/2020 mediante la cual se ejerció la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampaña y el relativo para recabar apoyo ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020 (INE 2020-1, 1-115).

En dicho acuerdo, y reconociendo la diversidad de criterios en las distintas entidades federativas, se estableció la conclusión de los periodos de precampaña y, por lo tanto, los correspondientes a la entrega de informes de ingresos y gastos correspondientes a esa etapa, en fechas diferenciadas, como se muestra en el Cuadro 1.



<b>Cuadro 1. Conclusión del período de precampaña Proceso Electoral 2020-2021</b>		
<b>Bloque</b>	<b>Entidades</b>	<b>Conclusión de precampaña</b>
1	Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí	8 de enero de 2021
1-A	Sonora	23 de enero
2	Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Elección Federal	31 de enero
3	Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán	12 de febrero
4	Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla y Veracruz	16 de febrero

Fuente: *Ibidem*, p. 112

Una vez presentados los informes respectivos, la autoridad se abocó a su revisión minuciosa e integral, haciendo uso de los insumos descritos con anterioridad y, en los casos que se detectaron inconsistencias, lo hizo del conocimiento de los sujetos obligados a través de los oficios de errores y omisiones para que pudieran presentar las aclaraciones correspondientes. Las respuestas proporcionadas fueron valoradas por la autoridad para determinar las irregularidades subsistentes en el Dictamen respectivo.

Es importante precisar que los procesos internos de designación de candidaturas si bien son una manifestación de la facultad de autoorganización de los partidos políticos, los mismos se rigen por la legislación vigente y constituyen una obligación de carácter general que implica que se deben presentar los informes respectivos, independiente de la denominación o modalidad que dichos procesos hayan adoptado.

No obstante, en el proceso electoral 2020-2021 algunas fuerzas políticas presentaron diversos argumentos para intentar evadir dicha obligación: Desde falta de comunicación entre sus distintos comités para la presentación oportuna de informes, que el partido fue omiso en la presentación del informe aun cuando el precandidato o aspirante sí entregó la información, hasta que dadas las características de su proceso interno, éste no constituyó precampaña y, por ende, no se actualizó la obligación de presentar informes.

Así, en sesiones celebradas el 26 de febrero (INE 2021) y 25 de marzo del año en curso (INE 2021-1), el Consejo General determinó que esos precandidatos habían sido omisos en el cumplimiento de su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña y, por ende, les sancionó con la negativa de registro de la candidatura respectiva o cancelación del mismo, en caso de que ya se hubiera otorgado.

En este orden, en la revisión de informes de precampaña correspondiente al proceso electoral recién concluido se detectó que 61 precandidatos no presentaron sus informes de ingresos y gastos bajo el argumento de que no tuvieron la calidad de precandidatos y no habían incurrido en gasto alguno, pero de los cuales la autoridad se allegó de testigos que comprobaban lo contrario. El Cuadro 2 muestra la relación de aspirantes o precandidatos, por entidad, que incurrieron en esta falta:

Cuadro 2. Precandidatos sancionados con negativa o cancelación de registro de candidatura, por partido político y por cargo					
Partido Político	Diputaciones Federales	Gubernaturas	Alcaldías	Diputaciones Locales	Presidencias Municipales
Morena	25	5	2	9	13
Redes Sociales Progresistas	2	1	0	0	2
MAS Más Apoyo Social (Morelos)	0	0	0	0	1
Movimiento Dignidad Zacatecas	0	1	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Si bien de lo expuesto pareciera que la decisión de la autoridad constituyó un silogismo lógico formal en virtud del cual a determinadas conductas (premisas) recae una consecuencia jurídica (conclusión) que no requiere mayor estudio, lo cierto es que la determinación e imposición de sanciones requiere la valoración de los elementos y circunstancias de la falta concreta, aunado a que se debieron llevar a cabo procesos de interpretación, ponderación y estudios de proporcionalidad en términos de la naturaleza de la falta, la gravedad de la misma y los efectos o consecuencias en la esfera jurídica de los sujetos involucrados.

## 2. Casos relevantes en materia de fiscalización de precampañas en el proceso electoral 2020-2021

En el presente apartado se analiza, a partir de la metodología de estudio de caso, algunos de los principales problemas de aplicación e interpretación normativa que se suscitaron con motivo de la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de precampaña en el proceso electoral 2020-2021.

#### **a) Precandidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán**

Los casos referidos constituyen un importante objeto de estudio, no sólo por la materia de los procedimientos, sino por los criterios y precedentes que surgieron de los mismos.

En el caso del estado de Guerrero, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que seis aspirantes a distintos cargos de elección popular en la entidad, incluido quien había sido designado como candidato a la gubernatura, incurrieron en diversos conceptos de gasto en actos orientados a la búsqueda de las candidaturas respectivas y que, sin embargo, fueron omisos en presentar los respectivos informes de precampaña (*Idem*).

Para efectos de esta ponencia nos abocaremos al caso específico de quien había sido ganador de la candidatura a gobernador del estado.

Al ser requeridos por la autoridad para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre la falta detectada, tanto el partido político como el precandidato ganador, que en ese momento ya se ostentaba como candidato, manifestaron que no se tuvo la calidad de precandidato por la naturaleza particular del proceso de designación de candidaturas diseñado por el partido político, razón por la cual no se actualizaba la obligación de presentar los informes de mérito, aunado a que, dado que no tienen acceso al sistema informático, estuvieron imposibilitados de presentar el informe por sí mismos.

Asimismo, se manifestó haber entregado diversa información al partido político, pero había sido éste quien omitió la presentación del informe respectivo.

Más adelante, la representación del partido político presentó un informe de ingresos y gastos de precampaña en ceros a efecto de que se tuviera por cumplimentada la obligación de presentar el informe respectivo.

Al emitir la resolución correspondiente, la autoridad administrativa electoral estimó que el precandidato y el partido político, al haber omitido la presentación del informe de mérito había trastocado de manera especialmente grave los principios y valores de la transparencia y la rendición de cuentas, pues se había hecho nugatoria la facultad de la autoridad de revisar los ingresos y gastos y, en su caso, poder adoptar las medidas a que hubiera lugar, aunado a que, al haber incurrido en gastos no reportados, se había violentado también la equidad en la contienda, pues se habían obtenido ventajas indebidas ante el resto de contendientes.

Atento a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se determinó sancionar con la negativa de

registro de la candidatura respectiva, o cancelación del mismo en caso de que ya se hubiera otorgado (*Idem*).

En el caso de la precandidatura al gobierno de Michoacán el caso fue semejante, pues de igual forma, tanto el partido político como el precandidato adujeron que no tuvieron la calidad de precandidatos, no haber realizado actos de precampaña y, por lo tanto, no se actualizaba la obligación. De igual forma a lo ocurrido en el caso del estado de Guerrero, el partido pretendió presentar un informe en ceros para intentar dar cumplimiento a la obligación solicitando el cambio de calificación de la falta para pasar de omisión de entrega del informe, a entrega extemporánea del mismo.

No obstante, como en el primer caso, la autoridad también consideró que la falta consistente en la omisión de presentar el informe respectivo quedaba acreditada y que con ello se había trastocado la ley y los principios rectores de la función electoral, además de los de transparencia, rendición de cuentas y equidad en la contienda, por lo que impuso la sanción consistente en la negativa de registro o cancelación del mismo en caso de que ya se hubiera otorgado (INE 2021-2).

Inconformes con tal determinación, tanto el partido político como sus precandidatos ganadores en ambas entidades federativas promovieron diversos medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los cuales se advierten problemas jurídicos relevantes:

- a) ¿A quién corresponde la presentación de los informes: al partido político o a los precandidatos, considerando que el acceso al sistema informático se le entrega a los partidos políticos?
- b) ¿Cuándo se puede afirmar que determinados actos revisten la naturaleza de precampaña?
- c) Si los gastos detectados por la autoridad habían sido de cuantía menor, la sanción no podía consistir en el impedimento para ejercer un derecho fundamental como el de ser votado.
- d) Ante la posible contradicción de la ley, ¿qué disposición debe prevalecer?

Al dictar las sentencias correspondientes<sup>4</sup>, la Sala Superior determinó, en primera instancia, que las conductas desplegadas por los precandidatos sí constituían actos de precampaña, pues

---

<sup>4</sup> Se trata de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-JDC-416/2021 y acumulados, y SUP-RAP-74/2021 y sus acumulados SUP-JDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, respectivamente.

independientemente de la modalidad o denominación adoptada por el partido político para llevar a cabo su proceso interno de selección de candidatos, se trataba de actos desplegados con la finalidad de obtención de una candidatura a cargo de elección popular y, por ende, debían ser considerados de precampaña.

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la obligación, si bien la legislación y el reglamento establecen que la presentación de informes es de naturaleza solidaria lo que implicaría, en principio, que cualquiera de los sujetos obligados podría dar cumplimiento íntegro a la obligación, la Sala Superior reiteró su criterio en el sentido de que en materia electoral este tipo de obligación se cumple cuando el precandidato aporta toda la información y documentación de sus ingresos y gastos al partido político, y éste la organiza para presentar el informe en el Sistema Integral de Fiscalización.

En este rubro, aun cuando el precandidato ganador en el estado de Guerrero adujo haber entregado su información al partido político, en el expediente del procedimiento no hay constancia de dicha circunstancia, por lo que ni la autoridad administrativa ni el órgano jurisdiccional estuvieron en condiciones de hacer la valoración respectiva.

Si bien los sujetos obligados hubieran podido presentar su informe de manera extemporánea para que fuera revisado y valorado, la Sala Superior determinó que dicha extemporaneidad no puede exceder del proceso de fiscalización. Es decir, el análisis del mismo aún debe resultar material y jurídicamente posible; en cambio, en los casos concretos, dado el momento de presentación de los informes en ceros, era inviable su revisión pues dicha etapa ya había concluido, aunado a que, como se refirió, se pudieron haber puesto en riesgo otras etapas de los procesos.

No obstante, el Tribunal Electoral advirtió que, tal como lo plantearon los recurrentes, existía una inconsistencia en la ley, pues dos disposiciones establecían sanciones para la misma conducta. Por una parte, el artículo 229 establece la sanción directa de negativa o cancelación de registro de la candidatura; sin embargo, el artículo 456 de la misma ley establece un catálogo de diversas sanciones para la misma conducta, por lo que ordenó que la autoridad administrativa llevara a cabo una interpretación conforme de ambos preceptos y, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, se impusiera la sanción a que hubiera lugar.

En cumplimiento de las sentencias dictadas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si bien abundó en los elementos que le llevaron a tener por acreditadas las faltas,

estimó que la negativa o cancelación de registro de candidaturas era la sanción idónea a imponer, pues se habían trastocado gravemente los principios de la función Electoral, aunado a que, en los casos concretos, no se sancionaba el monto involucrado, sino la actitud de los sujetos obligados de no informar a la autoridad y, posteriormente, pretender evadir una sanción presentando un informe de tal manera extemporáneo que su análisis era inviable, lo que obstaculizó de forma severa la función de fiscalización de la autoridad<sup>5</sup>.

Inconformes con tal determinación, los sancionados promovieron sendos medios de impugnación ante la Sala Superior<sup>6</sup>. Si bien por decisión mayoritaria se decidió confirmar las resoluciones de acatamiento emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es de destacar el posicionamiento del Magistrado José Luis Vargas, quien alertó sobre los riesgos que implicaba imponer la sanción máxima como la cancelación del ejercicio de un derecho, a una falta administrativa que si bien resultaba grave, existían otras sanciones a imponer acordes e idóneas a la falta en concreto.

De su intervención en la sesión que la Sala Superior celebró el 27 de abril destaca lo siguiente:

En un ejercicio de mayor extensión, pero no necesariamente de mayor análisis jurídico, la autoridad electoral nacional determinó imponer la misma cancelación, o negativa de registro, al agotar, según expone, los parámetros y directrices impuestas por esta Sala Superior en nuestra resolución.

Y lo que se fijó en aquellas sentencias fue que interpretara la disposición que sanciona la omisión de entrega de los informes, en el sentido de que no solo se considerara la cancelación del registro como única sanción, sino que, esta recayera sólo como máxima pena, y dependiendo del análisis de los diversos elementos que convergieron en la comisión de la conducta infractora determinara la correspondiente.

Desde mi perspectiva, de una ponderación objetiva de los elementos que la responsable debía considerar para calificar la falta e imponer la sanción en el caso de la candidatura de Guerrero, considero que no se justifica la cancelación o negativa de registro de candidatura, porque, en mi opinión, no es proporcional a la falta cometida, ni a las circunstancias objetivas y subjetivas, mucho menos al contexto en que se presentaron los hechos (TEPJF 2021, 28-35).

---

<sup>5</sup> Se trata de las Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificadas con las claves INE/CG357/2021 e INE/CG358/2021, respectivamente.

<sup>6</sup> Dichos medios de impugnación fueron resueltos a través de las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-623/2021 y acumulados, y SUP-RAP-108/2021 y sus acumulados SUP-RAP-109/2021, SUP-JDC-630/2021, SUP-JDC-650/2021 y SUP-JDC-751/2021.

Como se puede advertir del extracto de la intervención del Magistrado Vargas Valdez se advierte una inconsistencia legal no menor: si dos preceptos establecen sanciones para la misma conducta es incuestionable que debe hacerse el estudio exhaustivo y pormenorizado respecto la gravedad de la falta, las circunstancias particulares y, en el caso concreto, armonizar los preceptos en aparente conflicto para que se imponga la sanción que resulte idónea y proporcional a la falta cometida, pero no resulte excesiva, gravosa o establezca la restricción o limitación para el ejercicio de un derecho fundamental como el de ser votado. Si bien la falta de rendición de cuentas reviste una gravedad significativa que no puede ser pasada por alto, bien vale preguntarse en qué casos o bajo qué circunstancias se amerita que la única sanción a imponer sea la restricción de un derecho. Si bien es cierto, como se señaló con anterioridad, que los derechos no son absolutos y pueden ser limitados o restringidos cuando haya causas suficientes que así lo ameriten o requieran, es claro que dicha acreditación debe ser absoluta, fehaciente y sin dejar lugar a dudas, pues no pasa inadvertido que la propia Norma Fundamental establece que la interpretación de la ley se hará potenciando los derechos del individuo otorgando la protección más amplia.

#### **b) Aspirantes a candidaturas independientes**

La fiscalización de la etapa de obtención de firmas de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral 2020-2021 también resultó aleccionadora por los criterios que se emitieron para solventar deficiencias normativas o armonizar el orden jurídico electoral.

En el caso concreto, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tuvo por acreditado que algunos aspirantes a candidaturas independientes fueron omisos en la presentación de sus informes por lo que, agotado el procedimiento respectivo, determinó imponer, con fundamento en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como candidato independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo, así como la imposibilidad a ser registrado en las dos elecciones subsecuentes.

El tema también fue materia de estudio por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas ejecutorias.

Tal es el caso de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey en el recurso de apelación identificado con la clave SM-RAP-102/2021, en la que se determinó inaplicar la porción normativa correspondiente por considerarla desproporcionada (SM-RAP-102/2021, 11-23), como se expone a continuación:

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó al ciudadano Edgar Jiménez Trejo, aspirante a candidato independiente a presidente municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, por un lado, con la pérdida del derecho a ser registrado en el proceso electoral 2020-2021 y, por otro, con la pérdida del derecho a ser registrado en los dos procesos electorales siguientes, por la omisión de presentar el informe de la etapa de obtención de apoyo ciudadano (INE 2021-5).

Al respecto, la Sala Regional Monterrey consideró que se acreditaba la omisión de presentar el Informe de ingresos y gastos y, por tanto, debía mantenerse la sanción consistente en negativa o cancelación de registro de la candidatura en el proceso electoral que se encontraba en curso, no así la consistente en pérdida de derecho a ser registrado en dos procesos electorales subsecuentes.

A juicio de dicho órgano jurisdiccional, la porción normativa controvertida resultaba contraria a la regularidad constitucional y, por tanto, debía inaplicarse al caso concreto por resultar contraria a los principios constitucionales de proporcionalidad e igualdad de sanciones que tienen la misma causa.

A juicio de la Sala Regional, la sanción de inhabilitación para dos procesos electorales siguientes a aquel en que se comete la falta infringe directamente la prohibición de penas desiguales y desproporcionales, contemplada en el artículo 22 constitucional, en la medida que la legislación prevé distinta sanción para conductas que son igualmente reprochables.

Criterio sustentado, igualmente, por la Sala Superior, específicamente a través de la sentencia recaída al recurso de reconsideración SUP-REC-265/2021, en la que se sostuvo que el principio de proporcionalidad de penas analiza una regla con la finalidad de determinar si la regla satisface o no la exigencia del principio constitucional; es decir, si la pena es acorde o no con relación al bien jurídico afectado (SUP-REC-265/2021, 10-21).

Asimismo, se advirtió que la sanción asignada por el legislador a la omisión de presentar informes de precampaña en comparación con la omisión de presentar informes de la etapa de obtención de apoyo ciudadano es distinta e infringe el artículo 22 constitucional.



Como en el caso de la problemática planteada en el inciso anterior, en este supuesto también vale la pena cuestionarse sobre si una falta administrativa puede ser suficiente para imponer a quien la comete la pena máxima de impedirle el ejercicio de un derecho fundamental, como el de ser votado, además de las diferencias de sanción para conductas semejantes que violentan los mismos bienes jurídicos tutelados por la norma.

### **3. Prospectiva**

Los procesos electorales son, como se ha señalado en apartados precedentes, la vía por excelencia a través de la cual el pueblo de México renueva los cargos de poder público. Los mismos se llevan a cabo a través de un complejo andamiaje normativo e institucional que, en última instancia y después del cumplimiento de diversas etapas, garantizan que dicha renovación de cargos de elección popular se lleve a cabo de manera pacífica y dentro de los cauces legales.

Para cumplir dichas finalidades, resulta un presupuesto indispensable que tanto el marco normativo como las autoridades doten de certeza dichos procesos en la medida en que los actores políticos conocen de inicio los derechos y obligaciones a los que quedan sujetos, eliminando cualquier resquicio para la discrecionalidad o la ambigüedad.

No obstante lo anterior, y en la medida en que se trata de actividades humanas, no se encuentran exentas de error, lo que implica que las normas y procedimientos deben estar sometidas a un proceso continuo de evaluación en cuanto a su incidencia e impacto de manera que, en caso de detectar insuficiencias o alguna otra eventualidad, se puedan adoptar las medidas necesarias para corregirlas o replantearlas.

Aun cuando, como también se ha señalado, la pandemia que aún afecta al país transformó de manera relevante la forma en que se llevan a cabo diversos procedimientos, lo que implicó que los mismos se adecuaran a través de acuerdos u otro tipo de instrumentos para dar operatividad a la norma, aunado a que la labor jurisdiccional ha sido determinante, pues a través de los criterios y precedentes emitidos ha sido posible dar cauce a problemas jurídicos, como los analizados en el apartado anterior.

Así, si bien la pandemia y otro tipo de eventualidades constituyen situaciones excepcionales para los cuales no había forma de anticiparse, lo cierto es que estas eventualidades pusieron de manifiesto diversas insuficiencias normativas, lo que conduce indefectiblemente a

reflexionar sobre si la legislación vigente es acorde o armónica a la situación de los procesos electorales en el país y las exigencias de la sociedad para garantizar la plena observancia de los principios rectores de la función electoral o bien, si es necesario llevar a cabo alguna adecuación y, de ser el caso, en qué sentido debieran darse las mismas.

Para efectos de esta ponencia, a continuación se esbozan algunos rubros que, se considera, podrían contribuir al debate legislativo para la mayor eficiencia de los procesos electorales, privilegiando el derecho fundamental del ciudadano a votar y ser votado, tutelando de manera efectiva el orden jurídico y sus instituciones.

En primera instancia, respecto de la presentación de los informes, se observa indispensable precisar la naturaleza de la obligación, habida cuenta que está demostrado que la misma ha sido confusa y genera conflictos de cumplimiento y aplicación. En este orden, se estima necesario adecuar la naturaleza de dicha obligación precisando que el sujeto directamente vinculado es el partido político y que, en todo caso, el aspirante o precandidato contribuye a la referida obligación proporcionando la información atinente.

En este orden, resulta indispensable, asimismo, que la autoridad electoral nacional, la única competente para fiscalizar los recursos de los sujetos obligados, adecue su sistema informático para garantizar su operatividad en cuanto a personas con acceso al mismo, la información que puede ingresarse al mismo, la oportunidad, entre otros aspectos.

Por otro lado, si bien la legislación es un producto perfectible y sujeto a revisión y evaluación, es claro que una ley que ha sido rebasada por la realidad en nada contribuye a la certeza que debe imperar en los procesos electorales.

Por ello, se estima indispensable hacer una revisión pormenorizada del catálogo de posibles sanciones para una conducta específica, garantizando la armonización del orden jurídico electoral y atendiendo a la previsión constitucional por cuanto a que todas las autoridades deben interpretar la norma en lo que resulte más favorable para el ciudadano, garantizando la protección más amplia.

Así, si bien el principio jurídico establece que ante la duda se debe estar a lo que resulte más favorable al ciudadano o al indiciado de cualquier procedimiento, no pasa desapercibido que se debe tender, más que a la resolución de un conflicto o deficiencia normativa por aplicación de principios, a la elaboración de normas congruentes, claras, armónicas con el resto del orden jurídico de la materia y el general, etc.

A propósito de lo anterior, no pasa desapercibido que las sanciones propuestas para aspirantes a candidaturas independientes también deben ser sometidas a una revisión exhaustiva pues, como se refirió con anterioridad, el Tribunal Electoral ha demostrado que se da tratamiento diferenciado a conductas semejantes, lo que afecta en mayor proporción a un aspirante a candidatura independiente y si bien hay respuesta jurídica a través de la interpretación, ponderación y mediante un test de proporcionalidad, es inconcuso que dichos procedimientos deben ser de aplicación excepcional y, en cambio, se debe procurar que la legislación sea un producto claro que dote de precisión y certeza a sus destinatarios.

## **Conclusiones**

En los apartados precedentes se han expuesto de manera sucinta algunas de las áreas de oportunidad y vicisitudes que se pusieron de manifiesto con motivo del proceso electoral recién concluido, específicamente en materia de fiscalización de los informes de ingresos y gastos de precampaña. De dicha exposición es posible advertir las siguientes conclusiones:

- a) La fiscalización electoral es un componente de la democracia de nuestro país y del adecuado desarrollo de los procesos electorales, pues constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que permite conocer que los recursos que utilizan los sujetos obligados para sus actividades ordinarias o proselitistas tienen origen lícito y se destinan a los fines legalmente permitidos. Ante la detección de irregularidades, la autoridad debe intervenir de manera pronta para adoptar las medidas atinentes para restablecer la legalidad violentada.
- b) La reforma política de 2014 trajo cambios significativos en materia de fiscalización que van desde la determinación de una autoridad única en la materia, hasta diversas eventualidades como la pluralidad de ordenamientos jurídicos aplicables, lo que impone la necesidad de armonización e interpretación que permita el adecuado ejercicio de dichas funciones sin comprometer o poner en riesgo otras etapas de los procesos electorales que se encuentren en curso.

Ello se advierte, a manera de ejemplo, en el caso del proceso electoral 2020-2021, en el que fue necesario adoptar acuerdos para establecer fechas homogéneas de conclusión de precampañas y de presentación de informes, para el cumplimiento de esta importante función.

- c) La fiscalización electoral no se constriñe a la revisión de los informes que presentan los sujetos obligados, sino que se complementa a través de complejas labores contables, de auditoría, monitoreo e investigación que le permiten allegarse de elementos adicionales que le permiten cotejar lo reportado por los sujetos obligados y, en su caso, determinar la veracidad de la información.
- d) No obstante ese andamiaje normativo e institucional, aun se evidencian retos y áreas de oportunidad ante los cuales la normatividad no ha contemplado diversos supuestos, por lo que ha sido indispensable la intervención de la autoridad jurisdiccional para que, a través de sus criterios y precedentes, se colmen las deficiencias e insuficiencias de la normatividad vigente.
- e) Casos que se presentaron en el proceso electoral en curso ponen de manifiesto varias de esas insuficiencias, a grado tal que se imponga la necesidad de reflexionar sobre si una falta de naturaleza administrativa es suficiente o amerita ser sancionada con una pena máxima de limitar el ejercicio de derechos fundamentales e, incluso, cuál debe ser el tratamiento para el caso de normas contradictorias o en aparente conflicto.
- f) Estas eventualidades constituyen, como ya se ha señalado, áreas de oportunidad que, se considera, requieren atención legislativa pronta, pues en la medida en que el marco normativo no es claro o adolece de diversas inconsistencias como las que se analizaron en la presente ponencia, se debilita la democracia y se abren espacios a la discrecionalidad, lo que en nada contribuye a la certeza que debe privar en los procesos electorales de nuestra democracia.

## Bibliografía

- CADH. Convención Americana de Derechos Humanos. 1969. San José, Costa Rica: Organización de Estados Americanos. Disponible en: [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf) (Consultada el 9 de julio de 2021).
- CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los Derechos Humanos? Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos> (Consultada el 9 de julio de 2021).
- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2021. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_280521.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf) (Consultada el 9 de julio de 2021).
- INE. Instituto Nacional Electoral. Numeralia de Procesos Electorales 2020-2021. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (Consultada el 9 de julio de 2021).
- , 2020. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114314/CGex202008-07-rp-1.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- , 2020-1. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, en acatamiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Consultada el 23 de julio de 2021).

- , 2021. Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de Precampaña presentados por los Partidos Políticos de las precandidaturas al cargo de Gubernaturas, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Disponible en: <https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-26-de-febrero-de-2021/> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- , 2021-1 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Morena, los ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto, y la ciudadana Adela Román Ocampo, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO. Disponible en: <https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-25-de-marzo-de-2021/> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- , 2021-2 Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118644/CGor202103-21-rp-3-27.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- , 2021-3. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave SUP-JDC-416/2021 y acumulados SUP-RAP-73/2021, SUP-RAP-75/2021, SUP-JDC-428/2021 y SUP-JDC-432/2021. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119244/CGex202104-13-ap-04.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- , 2021-4. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-74/2021 y acumulados. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119245/CGex202104-13-ap-05.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2021).

- , 2021-5. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Querétaro. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118664/CGor202103-21-rp-3-38.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2021).
- LGIPE. Ley General de Partidos Políticos. 2021. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_130420.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf) (Consultada el 9 de julio de 2021).
- LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 2021. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP\\_130420.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf) (Consultada el 9 de julio de 2021).
- Sentencia SM-RAP-102/2021. Actor: Edgar Jiménez Trejo. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sentencias\\_salas\\_tepjf/documento/2021-06/SM-RAP-102-2021.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepjf/documento/2021-06/SM-RAP-102-2021.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).
- SUP-JDC-416/2021 y acumulados. Actores: J. Félix Salgado Macedonio, Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Morena. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0416-2021.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0416-2021.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).
- SUP-JDC-623/2021. Actores: Raúl Morón Orozco y Morena. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0623-2021.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0623-2021.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).
- SUP-RAP-146/2020. Actor: Partido Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/46/SUP\\_2020\\_RAP\\_46-922329.pdf](https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/46/SUP_2020_RAP_46-922329.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).

- SUP-RAP-74/2021 y sus acumulados SUP-JDC-424/2021 y SUP-JDC-425/2021. Actores: Morena y Raúl Morón Orozco. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0074-2021.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0074-2021.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).
- SUP-RAP-108/2021 y sus acumulados SUP-RAP-109/2021, SUP-JDC-630/2021, SUP-JDC-650/2021 y SUP-JDC-751/2021. Actores: Partido de la Revolución Democrática, Morena, J. Félix Salgado Macedonio y Adela Román Ocampo. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0108-2021.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0108-2021.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).
- SUP-REC-265/2021. Actora: María de Jesús Hernández Alemán. Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0265-2021.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0265-2021.pdf) (Consultada el 23 de mayo de 2021).
- TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2021. Versión estenográfica de la sesión pública de resolución por videoconferencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 de abril de 2021. Disponible en: [https://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/sesiones/estenograficas/ve-2704211956.pdf](https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/sesiones/estenograficas/ve-2704211956.pdf) (Consultada el 23 de julio de 2021).